



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL



SECRETARÍA JURÍDICA - ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ

Rad. No.: 2-2020-15075

Fecha: 02/10/2020 18:27:29

Destino: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Copia: N/A

Anexos: N/A



2300100
Bogotá D.C.,

Doctor
FREDDY ANANIAS URREGO GARZÓN
Secretario General de Organismo de Control (E)
CONCEJO DE BOGOTÁ
Calle 36 No. 28A-41
Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 06-10-2020 10:52:51

2020ER16499 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL/WILLIAM LIBARDO MENDIETA

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/CARDENAS PEÑA ILBA YOHANNA

ASUNTO: RPTA PROPOSICION 739-20

OBS: 202015075

Asunto: Respuesta Proposición No. 739 de 2020, aprobada en la Sesión Plenaria Extraordinaria realizada el día 25 de septiembre de 2020. Radicado Sec. Jurídica 1-2020-13096.

Respetado doctor Urrego:

Esta Secretaría recibió la proposición referenciada en el asunto, presentada por los Concejales Julián David Rodríguez Sastoque y Lucia Bastidas Ubaté de la Bancada Partido Alianza Verde, relacionada con el tema **“PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) – ADITIVA A LA 468 DE 2020”**.

Al respecto, y en el marco de las funciones y competencias establecidas para la Secretaría Jurídica Distrital, a través del Decreto Distrital 323 de 2016, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 798 de 2019, este Despacho se permite dar respuesta a la pregunta No. 7 en el siguiente sentido:

“7. Teniendo en cuenta las respuestas dadas por la Secretaría Jurídica Distrital en el cuestionario inicial de la proposición 486 de 2020 y los formatos de compromiso anticorrupción exigidos en los procesos adelantados a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente indique: ¿De qué mecanismos jurídicos dispone el Distrito frente a los proponentes del proceso CCE-973-IAD-2019 sancionados por las resoluciones 71584 de 2019 y 42543 de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio una vez queden en firme? ¿La administración considera abstenerse de realizar órdenes de compra en la operación secundaria del PAE a los operadores sancionados en las mencionadas resoluciones?”

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



Certificado No. SG 2018007982

2311520-FT-019 Versión 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Respuesta:

Al igual que todas las entidades cuyo régimen de contratación corresponde a la Ley 80 de 1993 y las demás normas complementarias en materia de contratación, la Administración Distrital podrá hacer uso de las diferentes prerrogativas o potestades excepcionales establecidas en la Ley, como la terminación, modificación e interpretación unilateral de los contratos, con el fin de garantizar la adecuada gestión administrativa y contractual de la entidad. Adicionalmente, tal y como lo dispone el artículo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, si los proponentes enunciados incurren en una de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, para el caso de que aún se encuentren en las etapas del proceso de selección se entenderá que renuncian a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo, en caso de que el contrato haya sido adjudicado por cumplir con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos para ello, la entidad estatal podrá ordenar mediante acto administrativo motivado la cesión unilateral, sin lugar a indemnización alguna al contratista inhábil.

Ahora bien, para el caso de cesión, será la entidad contratante la encargada de determinar el cesionario del contrato.

Adicionalmente, y en protección de los derechos de la administración distrital, se podrán hacer efectivas las garantías que se requieran y consideren pertinentes para proteger el cumplimiento del objeto contractual suscrito.

Es menester recordar, que el Consejo de Estado¹, ha manifestado que la Administración solo podrá “(...) **rechazar o descalificar ofrecimientos hechos por causales previstas en la ley**, hipótesis bajo la cual la entidad pública licitante debe limitarse a dar por comprobado el hecho que justifica la exclusión y así lo debe declarar con apoyo en las correspondientes normas constitucionales o legales.

*Se tiene entonces que la objetividad en la selección, impone que **la descalificación de las ofertas provenga únicamente de la ponderación de los resultados derivados de un riguroso proceso de evaluación plenamente ajustado a la ley y al pliego de condiciones**, cuyos resultados además de ser conocidos por cada proponente -en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia- también sean conocidos por sus competidores con el propósito de controvertirlos (...)” (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera. De Radicado 54001233100019971262501. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá D.C., 07 de marzo de 2012.

Por otro lado, y en relación con las órdenes de compra en la operación secundaria del PAE para los operadores sancionados en las resoluciones relacionadas por el Organismo de Control consultante, la Secretaría Jurídica Distrital, ha insistido en el uso de cláusulas que incluyan las posibles sanciones a las que se verían avocados los oferentes que realicen algunas de las conductas previstas como contrarias a la libre competencia, o que vulneren cualquiera de los principios y normas rectoras relacionadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, se expidió el Decreto Distrital 189 de 2020, mediante el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se solicita incorporar cláusulas mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción, el cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=95985>.

En virtud de ello, la Administración Distrital se abstendrá de celebrar contratos o suscribir ordenes de compra con cualquier proponente que incumpla las disposiciones anteriores o se encuentre incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de la Ley. Las entidades tienen el deber de verificar la información de cada proponente respecto de su idoneidad y capacidad para la prestación de los servicios y/o bienes requeridos por la administración.

Atentamente,



WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE
Secretario Jurídico Distrital

c.c. N/A

Anexos: N/A

Proyectó: Anyi Sharlyn Marín Camargo – Contratista Dirección Distrital de Política Jurídica.
Revisó: Sergio Pinillos Cabrales – Director Distrital de Política Jurídica. 